

Enfoque

El paro judicial: malas razones

Con cifras en la mano se demuestra que los trabajadores de la Rama Judicial son los mejor pagados entre los servidores del Estado. La brecha entre magistrados y auxiliares debería ajustarse por lo bajo. El paro no se justifica.



JORGE IVÁN CUERVO R.

DIARIO DEL HUILA

Las posibilidades de solución del paro se alejan a medida que ambas partes — el Gobierno Nacional y la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional (ASONAL) — radicalizan sus posiciones respectivas.

¿Tienen razón los jueces y empleados de la Rama en cesar actividades para presionar la "nivelación salarial" que contempla la Ley 4ª de 1992?

¿Tiene razón el gobierno al invocar la restricción fiscal para ofrecer reajustes apenas graduales a estos funcionarios?

¿Son irreconciliables estas posiciones, ahora que el Ministerio de Trabajo — al cual se unieron el Ministerio de Justicia y la Contraloría General de la República — radicó una petición para declarar ilegal el paro ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia?

La Ley: qué dice y qué no dice

En la Ley 4ª de 1992 (expedida cuando el ministro de Hacienda era Rudolf Hommes) "se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales".

En Colombia hay cerca de 4.600 jueces y magistrados, unos 19.400 auxiliares judiciales, y cerca de 21.000 funcionarios de la Fiscalía General.

En el parágrafo del artículo 14 — donde se establece una prima técnica para magistrados de tribunales y jueces — se estipula también que "dentro del mismo término (el gobierno) revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad". Es decir, en la Ley 4ª de 1992 no hay una orden directa de aumentar los salarios de los trabajadores de la Rama Judicial, aunque sí una directriz para entrar a revisar su régimen salarial y prestacional.

Una forma de resolver el diferendo sería crear ya mismo una comisión mixta gobierno — sindicato para adoptar las pautas de nivelación o de reclasificación, y fijar un plazo para aplicarlas dentro del Marco Fiscal de Mediano



Los magistrados de las altas Cortes tienen una remuneración cercana a los 24 millones de pesos mensuales.

Plazo. Pero la discusión sobre la retroactividad de los ajustes parece ser el factor más complicado y el de mayor peso fiscal. Como la Ley 4ª no creó derechos adquiridos a que el salario fuera reajustado desde aquel momento, el punto podría resolverse con una propuesta orientada hacia el futuro —aunque este argumento probablemente no sería aceptado por los empleados judiciales.

¿Comparados con qué?

Ante todo es preciso definir qué se entiende por criterios de equidad, es decir, con qué deben compararse los salarios de los empleados de la Rama Judicial para saber si son "equitativos".

Con otros salarios en la propia Rama Judicial es decir, comparar entre jueces y magistrados, y entre estos y auxiliares judiciales (secretarios, oficiales mayores, sustanciadores, citadores);

Con los salarios de servidores públicos de otros sectores como educación, salud, seguridad y defensa, o de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Desde que la Ley 4ª entró en vigencia, los gobiernos cada año han expedido decretos que fijan escalas salariales de los trabajadores de la Rama Judicial, lo cual desmiente a quienes sostienen que la Ley no se ha cumplido en estos veinte años. La objeción parecería radicar en que los criterios de equidad utilizados no satisfacen las expectativas de los jueces de menor rango y en especial las de los auxiliares judiciales.

Quiénes son los afectados

En Colombia hay cerca de 4.600 jueces y magistrados, unos 19.400 auxiliares judiciales, y cerca de 21.000 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación —incluyendo fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y empleados administrativos— para un total aproximado de 45.000 servidores, cifra que en términos globales corresponde a la que esgrime el presidente de ASONAL Luis Fernando Otálvaro.

Sin embargo hay que advertir que los problemas

de nivelación se refieren sobre todo a los 19.400 empleados judiciales y a los cerca de 17.000 empleados administrativos de la Fiscalía. En otras palabras: los cerca de 4.100 fiscales y los 4.600 jueces y magistrados no tienen mayor problema de nivelación, pues sus salarios, primas técnicas y prestaciones son competitivas en el sector público y aún en el sector privado, habría sí que exceptuar a los 2.500 jueces de menor rango, es decir, civiles municipales, penales municipales, penales para adolescentes, familia, promiscuos municipales y de familia.

No sobra recordar que el salario de los procuradores judiciales, otros actores de la administración de justicia — 335 en lo penal, 195 en lo contencioso administrativo, 35 agrarios y cerca de 50 en civil y familia — es equivalente al del juez o magistrado ante quien intervienen, ya sea Juzgado Especializado, Tribunal o Corte.

En el caso de los procuradores judiciales grado II en lo penal, si bien el grueso de su trabajo se concentra ante los juzgados del Circuito y del Circuito Especializado, basta con que tengan que actuar ante un Tribunal para que perciban el salario de magistrado, equivalente a 8.067.115 pesos mensuales. Esto explica por qué el Procurador en trance de reelección ha sido tan cauto frente al paro judicial.

Cuánto ganan los jueces

En cumplimiento de la Ley 4ª de 1992, el gobierno expidió el decreto 0874 del 27 de abril de 2012, "por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar...". Según este decreto:

Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional tienen una remuneración cercana a los 24 millones de pesos mensuales; un salario básico de 9.349.699 pesos mensuales, sumados a la prima técnica del 30 por ciento del salario básico mensual y a otros factores no salariales.

Los magistrados auxiliares tienen una remuneración del orden de 19 millones de pesos mensuales: